



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018

REFERENCIA: 18/2019

FECHA: 27/02/2019

EXPEDIENTE: 871/2019

El Interventor que suscribe, de conformidad con los artículos 213 al 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004), tiene a bien emitir el siguiente **INFORME:**

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

La **Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)** configura una obligación de cumplimiento de un triple objetivo: la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera.

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad presupuestaria en las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural, y en el resto de entes dependientes la posición de equilibrio financiero.

Más concretamente, el artículo 15 del **Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria** establece que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95), el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales.

Por su parte, el artículo 32 de la LOEPSF regula el **destino del superávit presupuestario** señalando que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el



límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. Al respecto la Disposición adicional sexta incorpora unas reglas especiales para el destino del superávit con una limitación temporal. Señala que serán las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado las que podrán habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación de dicha disposición.

OBJETIVO DE REGLA DE GASTO:

El artículo 12 de la LOEPSF establece que la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, entendiéndose por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del SEC 95, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

En virtud del artículo 4 de la LOEPSF las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, definiéndose como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Por su parte, siguiendo el artículo 13 de la LOEPSF, el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Sin embargo, este objetivo debe cumplirse gradualmente hasta el ejercicio 2020, tal y como lo refiere la Disposición Transitoria Primera de la LOEPSF.



2.- EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en términos de contabilidad nacional supone que la suma de los derechos reconocidos netos de los capítulos I al VII es igual o superior a la suma de las obligaciones reconocidas netas de los capítulos I al VII. Para el ejercicio 2.018, los ingresos no financieros (capítulos I al VII) ascienden a 10.093.875,26 euros, mientras que los gastos no financieros (capítulos I al VII) ascienden a 9.066.755,90 euros, lo que supone una capacidad de financiación inicial de 1.027.119,36 euros.

Sin embargo, sobre esta capacidad de financiación deben practicarse una serie de ajustes motivados por la diferencia de criterios metodológicos empleados por el Sistema europeo de cuentas (SEC 95) y la Contabilidad Presupuestaria Local. Concretamente, y atendiendo al “**Manual del Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales**” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, los ajustes a realizar se agrupan en dos categorías:

1) Diferencias de imputación en el Presupuesto de gastos:

Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar al presupuesto.- La aplicación del principio de devengo del SEC 95 implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento de su aplicación presupuestaria. Por tanto, en el ejercicio 2.018 los ajustes a practicar son los siguientes:

- Las obligaciones correspondientes a gastos de ejercicios anteriores imputadas como OPAS y que han sido reconocidas y liquidadas en el presupuesto 2.018 a través de Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos ascienden a 19.655,39 euros. Por tanto hay que realizar un **ajuste positivo en 19.655,39 euros**.

- Las obligaciones correspondientes a gastos realizados que se encuentran pendientes de aplicar al presupuesto se distribuyen en los siguientes términos:

- Premio Cobranza Patronato Recaudación: 14.727,67 euros
- Aportación Consorcio RSU: 24.414,84 euros
- Aportación Consorcio Bomberos: 8.169,56 euros
- Nóminas: 127.741,72 euros
- Facturas: 353.791,70 euros



- Compromisos adquiridos sin facturar: 36.777,19 euros
- Obligaciones pendientes anticipos caja fija: 36.642,29 euros

Por tanto hay que practicar un **ajuste negativo por 602.264,97 euros**.

II) Diferencias de imputación en el Presupuesto de ingresos:

a) Ingresos tributarios.- En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan con carácter general de acuerdo con el criterio de caja, lo que supone que se contabilizarán los ingresos recaudados en el ejercicio corriente o en ejercicios cerrados, mientras que en el presupuesto local rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho. Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos I, II y III del Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos.

En el ejercicio 2.018 hay que realizar un **ajuste negativo de 312.677,50 euros**, derivado de los siguientes datos:

CAPÍTULOS	DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2.018	RECAUDACIÓN DHOS. REC. EJERCICIO CORRIENTE	RECAUDACIÓN DCHOS. REC. EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES A PRACTICAR
I	3.170.207,84	2.639.354,85	372.566,29	-158.286,70
II	47.213,13	31.823,02	34.003,79	18.613,68
III	1.778.666,05	1.154.045,29	451.616,28	-173.004,48
TOTAL	4.996.087,02	3.825.223,16	858.186,36	-312.677,50

b) Devolución PIE 2008, 2009 y 2016.- Las cantidades a devolver se contabilizan como menores ingresos en la aplicación correspondiente de ingresos, si bien el SEC 95 lo configuraría como una amortización de deuda financiera. Por tanto hay que practicar un **ajuste positivo de 95.070,92 euros**.

La capacidad de financiación definitiva se deduce del siguiente cuadro-resumen:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

SALDO OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.027.119,36
AJUSTES EN INGRESOS	-217.606,58
AJUSTES EN GASTOS	-582.609,58
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	226.903,20

Se produce por tanto un superávit financiero de 226.903,20 euros, lo que significa el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2.018.

OBJETIVO DE REGLA DE GASTO:

Según acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española se sitúa en el 2,4% para el ejercicio 2018. Por tanto, la variación relativa entre el gasto computable ejecutado en el ejercicio 2017 y el liquidado en el ejercicio 2018 no podrá superar dicho 2,4%.

El cálculo del gasto computable resulta de restar a los empleos no financieros (gastos de los capítulos I a VII en términos del SEC 95), los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Los gastos liquidados por los capítulos I a VII en el ejercicio 2017 ascienden a 9.354.702,53 euros, y los liquidados en el ejercicio 2018 importan 9.066.755,90 euros. Sobre estas cantidades deben practicarse una serie de ajustes motivados por la diferencia de criterios metodológicos del Sistema europeo de cuentas (SEC 95) y de la Contabilidad Presupuestaria Local.

Atendiendo a la liquidación del ejercicio 2017, a los 9.354.702,53 euros anteriores corresponden la aplicación de un **ajuste negativo de 2.183.792,77 euros**, resultando un gasto computable de 7.170.909,76 euros.

La aplicación del 2,40% sobre el gasto computable del ejercicio 2017 supone un **GASTO COMPUTABLE MÁXIMO A LIQUIDAR EN EL EJERCICIO 2018 DE 7.343.011,59 EUROS**.

Atendiendo a los cálculos realizados para la determinación de la capacidad de financiación, debe practicarse un **ajuste positivo de 582.609,58 EUROS** sobre los gastos del ejercicio 2018.



Si a los empleos financieros así calculados se restan los intereses de la deuda, las obligaciones reconocidas con capacidad de financiación del ejercicio anterior y los gastos financiados con aportaciones de otras administraciones públicas se obtiene un **GASTO COMPUTABLE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO 2018 DE 7.843.886,38 EUROS**. Se observa por tanto un incumplimiento de la regla de en 500.874,79 euros.

Se añade a continuación cuadro-resumen de los cálculos efectuados:

GASTOS	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
	2017	2018
CAP 1	4.646.283,73	4.410.096,92
CAP 2	2.817.040,98	2.568.015,92
CAP 3	15.033,95	2.474,39
CAP 4	363.198,66	382.612,55
CAP 5		-
CAP 6	1.500.651,88	1.681.096,12
CAP 7	12.493,33	22.460,00
TOTAL	9.354.702,53	9.066.755,90
GASTO NO COMPUTABLE (FINANCIADO CON CAPACIDAD FINANCIACIÓN)	0,00	- 415.239,83
AJUSTES EN GASTOS	- 100.934,92	582.609,58
INTERESES DE LA DEUDA	- 2.054,44	- 2.474,39
OBLIGACIONES FINANCIADAS POR OTRAS AAPP	- 2.080.803,41	- 1.387.764,88
GASTO COMPUTABLE	7.170.909,76	7.843.886,38
INCREMENTO DE GASTOS AUTORIZADO	2,40%	
INCREMENTO DE GASTOS LIQUIDADO	8,68%	
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACIÓN	0,00	
GASTO COMPUTABLE MÁXIMO	7.343.011,59	
GASTO COMPUTABLE 2.018	7.843.886,38	
MARGEN REGLA GASTO	-500.874,79	



OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

El Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 estableció los objetivos de deuda pública de las entidades locales en el 2,7% del P.I.B. para el ejercicio 2018.

Sin embargo, ante la falta de concreción de este objetivo para los entes locales, por imposibilidad de relacionar el PIB con los ingresos de las entidades locales, debe hacerse referencia al cumplimiento de límite general de deuda previsto en la todavía en vigor Disposición Final Trigésimo primera de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que podrán concertarse nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, sin ningún tipo de autorización, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados, deduciendo el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que por su afectación legal y/o carácter recurrente no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

Teniendo en cuenta que los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2018, una vez deducidos ingresos no considerados como ordinarios, ascienden a 9.061.779,60 euros, y que la deuda viva a 31/12/2018 es de 2.137.968,00 euros, se obtiene un porcentaje del 24%.

En cuanto al periodo medio de pago, se configura un nuevo sistema para su determinación a través del *El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.*

En base a esta normativa el periodo medio de pago se sitúa en el cuarto trimestre de 2018 en 2,17 días, muy por debajo de los 30 días configurados como límite legal.

3.- CONCLUSIONES:

Primero.- Se obtiene en el ejercicio 2018 un superávit presupuestario de 226.903,20 euros que se destinarán, de acuerdo con el artículo 32 de la LOEPSF, a reducir el nivel de endeudamiento neto de la entidad, toda vez que a la fecha del presente informe no se ha prorrogado la posibilidad de destinarlo a otro tipo de gastos prevista en la disposición adicional sexta.



Segundo.- Se incumple la regla de gasto en 500.874,79 euros, lo que supone la obligación de elaborar y aprobar un Plan económico-financiero en los términos de los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tendrá por objetivo permitir en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, y deberá contener como mínimo la siguiente información:

- a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.
- b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gasto.
- c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
- d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
- e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

El plan económico-financiero será presentado al Pleno Municipal en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, deberá aprobarse en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. Se dará al Plan Económico-financiero la misma publicidad que la establecida por las leyes para los presupuestos de la entidad, y se remitirá para su conocimiento al órgano de la Junta de Andalucía que ejerza la tutela financiera de las corporaciones locales.

Es cuanto se tiene el deber de informar salvo mejor opinión fundada en Derecho
EL INTERVENTOR MUNICIPAL
Fdo.- Jose Mulero Párraga